

FUKUSHIMA Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ENERGÍA

(II PARTE)

Los medios de comunicación, con su inconmensurable oferta de noticias, parecen ejercer sobre la población el mismo efecto magnético que la luna sobre las mareas. Gracias a ese efecto, los productores de energía nuclear aprovecharán la progresiva desatención de la opinión pública al tema nuclear para reanudar su coerción sobre las élites decisorias y así lograr que se liciten nuevas centrales y extender la vida útil de las viejas.

En el mundo hay 442 centrales nucleares y 65 nuevas serán inauguradas pronto. Además, hasta el momento más del 50% de las centrales que han ido llegando al final de su vida útil han gozado de extensiones de incluso 20 o 25 años adicionales; en Japón hay planes de que algunas centrales duren 70 años. Los gobiernos, amparados en el escaso interés que la población muestra de veras por las fuentes de la energía que utiliza, suelen encontrar más soluciones que problemas en la ya tradicional energía nuclear, y de ahí que apenas apuesten por el desarrollo y la investigación de formas de energía *limpias*, es decir, de aquellas energías no susceptibles de producir daños colaterales en caso de accidente natural o fallo humano.

Por su parte, las energías renovables ofrecen ventajas de las que apenas ha oído hablar el ciudadano, como la

posibilidad de que cada hogar produzca su energía (solar, eólica o de biomasa, por ejemplo), por cuyos excedentes podría incluso ser remunerado, o la posibilidad de adquirir nueva energía de la red de forma individualizada. A largo plazo, las energías renovables pueden garantizar unos niveles de vida óptimos sin poner en grave riesgo al hombre y a su entorno.

A la vista de estos datos, la pregunta que surge de forma espontánea es: ¿por qué hay tanta gente empeñada en mantener e incluso expandir la energía nuclear, cuando hay otras energías alternativas mucho más limpias?

Los ciudadanos habrán observado ya que a la clase política de cualquier signo no le interesa enfangarse en ningún discurso que contenga la palabra *nuclear*, y esto se debe a dos motivos: por un lado, tanto si se habla a favor como en contra de esta forma de energía se genera una controversia transversal que necesariamente hace perder votos; por otro, cualquier cambio en la política energética de un país nuclearizado por lo que respecta a la energía pone en pie de guerra a la clase trabajadora y a los sindicatos, que en el caso de las centrales nucleares apartan el asunto de la seguridad de sus trabajadores a favor de los altísimos niveles de contratación que cualquier central genera en torno a sí. Como se ha visto, solo en casos excepcionales como el que se dio en Alemania en marzo (con el accidente nuclear en Japón, unas

elecciones inminentes y la baja popularidad del partido conservador, tradicionalmente pro-nuclear, en el poder), el anuncio del cierre provisional, y a todas luces propagandístico, de sus centrales más vetustas puede llegar a tener un efecto electoral levemente beneficioso.

Pese a que cada vez más centrales van llegando al final de sus vidas útiles, sus empresas propietarias presionan a los gobiernos para que se les permita ampliar los beneficios de unas plantas de energía cuya inversión inicial amortizaron décadas atrás, lo que se traduce en beneficios absolutos, hasta tal punto que incluso allá donde por cualquier motivo la opinión pública demande una acción en pro de la seguridad por parte del gobierno, el máximo desembolso en mejoras y en la construcción de edificios adicionales resulta nimio frente a la ganancia neta que supone cada año de extensión de la vida útil de una central amortizada.

Así pues, bajo la actual normativa, los rendimientos económicos de las centrales nucleares, una vez se ponen en marcha, son mucho mayores para los propietarios que los beneficios que puedan obtener de las energías limpias. Hay que insistir, no obstante, en la locución "bajo la actual normativa", porque el motivo por el que la energía nuclear resulta tan lucrativa es que las empresas nucleares operan en régimen de casi monopolio (este es el caso de TEPCO en Japón o de AREVA en Francia, los dos países más

nuclearizados del mundo). Por el contrario, las energías renovables tienen unos costes de instalación muy inferiores y operan en régimen de competencia perfecta, algo que, como es bien sabido, tiene la virtud de acercar los precios a los costes y limitar los márgenes empresariales excesivos.

Los regímenes monopolísticos que conlleva la energía nuclear se deben a la altísima inversión inicial necesaria para construir una central. Unas instalaciones como las de Fukushima cuestan unos 10.000 millones de dólares, una inversión excesivamente alta que merece la pena si el Estado garantiza una remuneración constante y a largo plazo, y sobre todo si el Estado cubre el seguro en caso de catástrofe (como la recientemente acaecida en Japón). Los Estados, por su parte, aceptan ese trato en la medida que en que las centrales nucleares contribuyen a la independencia energética del país, garantizan su suministro y por añadidura mantienen entrenados a los ingenieros civiles (cuyos servicios son los primeros requeridos en una eventualidad militar de urgencia).

Una vez se establece esa alianza entre élites energéticas y élites políticas, la dinámica que se produce es necesariamente perversa. El lenguaje tiende a tecnificarse por parte de las empresas nucleares y su arrogancia les lleva a afirmar que la energía nuclear es 100% segura, sin margen de error. Al mismo tiempo, los políticos prefieren sacar el debate de la calle y tienden a

remitirlo al ámbito de los expertos, en concreto a los Comités de Seguridad Nuclear. Estos Comités, pese a que son instituciones jurídicamente independientes, suelen ser cooptados en distintos grados por las propias empresas nucleares, ya que si estas desaparecieran harían también peligrar la función misma de esos mismos Comités.

Es cierto que sin energía no hay desarrollo, pero no es menos cierto que sin democracia tampoco lo hay. A la vista de la información de la que disponemos, es evidente que la energía nuclear no solo es potencialmente letal a medio plazo y desmesuradamente contaminante a largo plazo (el tema de los residuos merece un espacio aparte), sino que ni siquiera implica un desarrollo económico independiente, real y de futuro. Y por si esto fuera poco, el elitismo con el que se gestionan las licencias monopolísticas de las centrales apunta a una grave brecha antidemocrática, brecha que se ampara en la desinformación de los ciudadanos. Parece mentira que ninguna voz en ningún medio se haya alzado todavía para plantear una sencilla pregunta: ¿por qué los consumidores pueden elegir la empresa que les suministra la electricidad, pero no la fuente de energía de la que proviene? Sería lógico que así fuera, del mismo modo que eligen el tipo de procedencia de sus alimentos (de granjas intensivas/extensivas, transgénicas, ecológicas...)

Ojalá las imágenes de los reactores de Fukushima permitan a más y más gente entender cuál es el núcleo del problema, y se empiecen a dar pasos importantes hacia una nueva solución a la obtención de energía; una solución más limpia y sobre todo, más democrática.

AMY MARTIN